

0769-D-03

Buenos Aires, 3 de marzo de 2003.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Eduardo Camaño.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de mi autoría, que fuera presentado bajo el número de expediente 7.344-D.-01, publicado en el Trámite Parlamentario N° 188/01.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rubén H. Giustiniani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE MIGRACIONES

TITULO PRELIMINAR

Política migratoria argentina

Capítulo I

Ambito de aplicación

Artículo 1° – La presente ley se aplicará a toda persona migrante sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonial, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

Art. 2° – Se entenderá por “inmigrante” todos aquellos extranjeros que no hubieran nacido en el territorio nacional y que deseen transitar, residir o establecerse definitivamente en el país a fin de desarrollar las actividades lícitas en situación de igualdad con los ciudadanos de la República Argentina.

Capítulo II

Objetivos

Art. 3° – Son objetivos generales de la política migratoria de la República Argentina:

- a) Dar aplicación efectiva a las estrategias, políticas y compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de las personas;
- b) Contribuir al logro de las metas demográficas que establezca el gobierno nacional con respecto al tamaño, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la población del país;
- c) Enriquecer y fortalecer el tejido cultural y social del país;
- d) Facilitar la reunión en la Argentina de ciudadanos argentinos y residentes permanentes con sus familiares inmediatos del extranjero;
- e) Alentar y facilitar la integración a la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes, promoviendo al respecto la cooperación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipios, instituciones públicas y privadas, el movimiento obrero organizado, las asociaciones de productores y empleadores y las ONG;
- f) Promover y garantizar, conforme a la Constitución Nacional y las leyes, la igualdad de oportunidades y de trato en materia laboral, seguridad social, derechos gremiales y culturales y libertades individuales y colectivas para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentren legalmente en

territorio argentino;

- g) Promover la integración laboral de las personas que opten por residir en nuestro territorio, de manera de optimizar su aporte a la estructura laboral y a los mercados de trabajo nacionales y regionales, permitiendo el aprovechamiento de sus capacidades;**
- h) Facilitar la entrada de visitantes a la Argentina para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas y tecnológicas y las relaciones internacionales;**
- i) Asegurar que cualquier persona que solicite ser admitida en la Argentina de manera permanente o temporaria esté sujeta a estándares de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y las leyes;**
- j) Cumplir los compromisos internacionales de la Argentina, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los trabajadores migrantes y sus familias;**
- k) Contribuir al desarrollo económico y social de todas las provincias argentinas;**
- l) Promover el orden internacional y la justicia denegando el uso del territorio argentino a personas involucradas o susceptibles de ser involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación;**
- m) Promover mecanismos y el intercambio de información a nivel regional, orientados a la asistencia técnica y capacitación de recursos humanos para controlar eficazmente a las organizaciones que, a nivel internacional, se dedican al tráfico de seres humanos así como a la falsificación de documentos oficiales.**

TÍTULO I

De los derechos y libertades de los extranjeros

Capítulo I

De los derechos y libertades de los extranjeros

Art. 4° – El derecho a la migración es un derecho esencial e inalienable de la persona, que la República Argentina garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad para todos los extranjeros. Este derecho corresponde plenamente no sólo a los individuos sino a todas las familias migrantes.

Art. 5° – El estado en todas sus jurisdicciones, asegura el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias a los servicios sociales y bienes públicos, a la salud, educación, justicia, trabajo y empleo, seguridad social y a la misma protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales.

Art. 6° – Los extranjeros gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales en relación con:

- a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza;**
- b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;**
- c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento para permitir su mejor inserción laboral en los mercados de trabajo aportando al desarrollo económico de nuestro país;**
- d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en materia de alquileres;**
- e) El acceso a los servicios sociales;**
- f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición migratoria y con sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los órganos interesados;**

g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.

El Estado promoverá condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que los extranjeros puedan gozar de los derechos enunciados, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su estancia.

Art. 7º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se entenderá que todos los derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes que de ellos se deriven serán aplicables a la persona inmigrante y su familia.

Art. 8º – Los hijos de los extranjeros tendrán derecho a acceder a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales.

Art. 9º – Los menores presentes en el territorio argentino están sujetos a la escolaridad obligatoria. El acceso de los hijos de los extranjeros a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el país.

Art. 10. – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores se entenderá que los menores migrantes gozan de todos los derechos, libertades y garantías establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, cualquiera sea la condición migratoria de éste, sus padres, representantes legales o quien de hecho ejerza su guarda o cuidado.

Art. 11. – Las instituciones hospitalarias o asistenciales, ya sean públicas, nacionales, provinciales o municipales, o privadas, no podrán en ningún caso negarse a prestar asistencia o atención a todos los extranjeros que lo requieran, sean residentes o no residentes.

Art. 12. – Los trabajadores migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de:

- a)** Sus derechos con arreglo a la presente ley;
- b)** Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica vigente;
- c)** Cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en la Argentina.

La autoridad de aplicación adoptará todas las medidas que considere apropiadas para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones. La información adecuada será suministrada a los extranjeros que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.

Art. 13. – Los extranjeros tendrán derecho a la libertad de movimiento en el territorio nacional y a escoger libremente en él su residencia.

Art. 14. – Los extranjeros tendrán el derecho a establecer asociaciones para el fomento y la protección de sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole.

Art. 15. – La Argentina facilitará, de conformidad con la legislación nacional en la materia y de manera armónica con los principios de la convención sobre la participación de los extranjeros en la vida pública al nivel local, adoptada en Estrasburgo el 5 de febrero de 1992, la consulta o la participación de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades locales donde residan.

Art. 16. – La Argentina, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad, garantiza el derecho a la reunión de los migrantes con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con él una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo. La autoridad de aplicación, por razones humanitarias, podrá conceder un trato igual a otros familiares de los migrantes.

Art. 17. – Los inmigrantes estarán exentos, con sujeción a la legislación aplicable, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por sus efectos personales y enseres domésticos, así como por el equipo necesario para el desempeño de la actividad para la que hubieran sido admitidos:

- a) En el momento de salir del estado de origen o del estado de residencia habitual;**
- b) En el momento de su admisión inicial en la Argentina;**
- c) En el momento de su salida definitiva del territorio nacional;**
- d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.**

Art. 18. – Respecto de cualquier extranjero, la Argentina podrá:

- a) Orientar el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado;**
- b) Orientar la elección de una actividad remunerada de conformidad con la legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adquiridas fuera del territorio.**

Art. 19. – El Estado fijará las condiciones en virtud de las cuales un extranjero que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en consideración el período durante el cual el trabajador haya residido legalmente en el país.

Art. 20. – Los extranjeros no podrán ser expulsados salvo por las razones definidas en la legislación nacional y con sujeción a las salvaguardas establecidas en la presente ley. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia. Al considerar si se va a expulsar a un migrante o a un familiar suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario y también el tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el país.

Art. 21. – La adopción por el Estado de todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación en el territorio nacional de migrantes en situación irregular, incluyendo la imposición de sanciones a los empleadores, no menoscabarán los derechos de los trabajadores migrantes frente a sus empleadores en relación con su empleo.

Art. 22. – El Estado tomará medidas apropiadas para asegurar que las situaciones de irregularidad de los migrantes no persistan. Cuando se considere regularizar la situación de dichas personas en los términos del artículo 35 de la presente ley, la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en el país y otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar.

Art. 23. – A los efectos de esta ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:

- a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad;**

- b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los argentinos, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad;**
- c) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los argentinos o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y asistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente ley, al extranjero que se encuentre en la Argentina, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad;**
- d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en la Argentina, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad;**
- e) Toda acción realizada por un empresario o su representante, que produzca un efecto perjudicial, discriminando, aun indirectamente, a los trabajadores por su condición de extranjeros, o su pertenencia a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.**

Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen injustificadamente a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad, siempre que se refieran a requisitos no esenciales para el desarrollo de la actividad laboral.

Queda garantizada la tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales.

Art. 24. – El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia, en particular:

- a) La realización de cursos de idioma castellano en las escuelas e instituciones culturales extranjeras legalmente reconocidas;**
- b) La difusión de información útil para la adecuada inserción de los extranjeros en la sociedad argentina, en particular aquella relativa a sus derechos y obligaciones;**
- c) El conocimiento y la valoración de las expresiones culturales, recreativas, sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes;**
- d) La organización de cursos de formación, inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los funcionarios y empleados públicos y de entes privados, que por sus funciones atiendan habitualmente a extranjeros o que posean competencia en asuntos relativos a la materia migratoria.**

Art. 25. – En caso de duda sobre la interpretación, aplicación de normas o alcance de esta ley, se entenderá que prevalece el principio del trato más favorable para el inmigrante.

TÍTULO II

De la admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones

Capítulo I

De las categorías y plazos de admisión

Art. 26. – Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “no residentes”.

Aquellos que ingresaren como “no residentes” podrán solicitar su cambio de categoría migratoria, cumpliendo con los requisitos para la admisión de la categoría solicitada.

Art. 27. – Las solicitudes de residencia o ingreso al país que se petitionen ante las oficinas

consulares en el extranjero, deberán formalizarse en las condiciones de la presente ley.

Art. 28. – Se considerarán “residentes permanentes” a aquellos extranjeros que ingresen al país para permanecer en él de manera definitiva, así como los que obtengan autorización posterior de permanencia en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes a los parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge de derecho o de hecho, hijos y padres.

A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio, con el ejercicio de los derechos mencionados en el primer párrafo del presente artículo, sin más trámite que la prueba de su identidad, filiación y nacionalidad de sus padres.

Art. 29. – Se considerarán “residentes temporarios” a todos aquellos extranjeros que ingresen al país en las siguientes subcategorías:

- a) **Trabajador inmigrante:** quien inmigre para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita y honesta, remunerada o no, con autorización para permanecer en el país hasta por tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar en forma autónoma o bajo relación de dependencia;
- b) **Rentista:** quien solvente su estadía en el país con recursos propios traídos desde el exterior, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuentes externas;
- c) **Pensionado:** quien perciba de un gobierno o de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, una pensión cuyo monto le permita un ingreso regular y permanente en el país;
- d) **Inversionista:** quien aporte sus propios bienes para realizar actividades de interés para el país o que invierta su capital en títulos de valores públicos, o cuyo ingreso al país tenga como propósito conocer otras alternativas de inversión;
- e) **Científicos y personal especializado:** quienes se dediquen a actividades científicas, técnicas, o de asesoría, contratados por empresas o entidades públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad. De igual forma, directivos, técnicos y personal administrativo de entidades públicas o privadas extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para cubrir cargos específicos en sus empresas y que devengue honorarios o salarios en la Argentina;
- f) **Deportistas y artistas:** contratados en razón de su especialidad por organismos, o empresas que desarrollan actividades en el país;
- g) **Religiosos de cultos reconocidos oficialmente,** con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto, sean de promoción, educación o asistencia.

Para cada uno de los incisos precedentes podrá concederse un término de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;

- h) **Pacientes bajo tratamientos médicos:** para atender problemas de salud en establecimientos sanitarios públicos o privados, con autorización para permanecer en el país hasta por un año, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. En caso de personas menores de edad, discapacitados o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer con acompañantes, esta autorización se hará extensiva a los familiares directos, representante o curador;
- i) **Académicos:** para asistir a asambleas, sesiones o reuniones, o para quienes ingresen al país en virtud de acuerdos académicos celebrados entre instituciones de educación superior en áreas especializadas, bajo la responsabilidad del centro superior

contratante. Su vigencia será hasta por el término de un (1) año, prorrogable por idéntico período cada uno, con autorización de entradas y salidas múltiples;

- j) **Estudiante:** quienes ingresen al país para cursar estudios como alumno regular en establecimientos educativos públicos o privados, con autorización para permanecer en el país hasta por dos (2) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples. El interesado deberá demostrar la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y, para las sucesivas renovaciones, certificación de su condición de estudiante;
- k) **Asilados y refugiados:** quienes hayan salido de su país de origen para proteger su vida, libertad o seguridad, ya sea por haber sido amenazados o por fundados temores de ser perseguidos por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente orden público en su país de origen, se les concederá autorización para residir en el país por el término de dos (2) años, prorrogables cuantas veces la autoridad de aplicación lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias que determine la legislación vigente en materia de refugio y a los convenios y tratados internacionales suscritos por la República Argentina;
- l) **Especiales:** quienes ingresen al país a desarrollar actividades no contempladas en los incisos anteriores y que sean consideradas de interés por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Art. 30. – Los extranjeros que ingresen al país como “no residentes” pueden ser admitidos en algunas de las siguientes subcategorías:

- a) **Turistas;**
- b) **Pasajeros en tránsito;**
- c) **Tránsito vecinal fronterizo;**
- d) **Tripulantes del transporte internacional;**
- e) **Trabajadores migrantes estacionales;**
- f) **Trabajadores migrantes fronterizos.**

Art. 31. – Los extranjeros admitidos en el país como “residentes temporarios” o “no residentes” podrán permanecer en el territorio nacional durante el plazo de permanencia autorizado, con sus debidas prórrogas, debiendo abandonar el mismo al expirar dicho plazo.

Art. 32. – El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país, según las categorías y subcategorías mencionadas, así como el plazo de permanencia, serán fijados en el Reglamento de Migraciones.

Art. 33. – Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

- a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en la Argentina, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención del permiso de residencia;
- b) Los representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares, de las misiones permanentes o de las delegaciones ante los organismos intergubernamentales con sede en la Argentina o en conferencias internacionales que se celebren en la Argentina;
- c) Los funcionarios destinados en organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en la Argentina, así como sus familiares, a quienes los tratados en los que sea parte la Argentina eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de este

artículo.

Art. 34. – Los extranjeros incluidos en acuerdos o convenios de migraciones suscritos por la República Argentina se registrarán por lo dispuesto en los mismos y por esta ley, en el supuesto más favorable para la persona inmigrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, de firmar acuerdos bilaterales de alcance general y parcial, que permitan atender fenómenos específicos, como el de la migración laboral fronteriza, ni por la posibilidad de establecer esquemas diferenciados de tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región respecto de aquellos países que resulten terceros dentro del proceso de regionalización, priorizando las medidas necesarias para el logro del objetivo final de la libre circulación de personas en el Mercosur.

Art. 35. – Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Poder Ejecutivo nacional, con la aprobación del Congreso de la Nación, podrá poner en vigencia, por un plazo determinado, un régimen de excepción destinado a promover y facilitar la radicación de aquellos extranjeros que estuvieran residiendo irregularmente en el país.

Art. 36. – El trámite para la obtención de un permiso de residencia en el país debe ser realizado de manera personal por el interesado, salvo casos debidamente justificados.

Capítulo II

De los impedimentos de la admisión

Art. 37. – Están absolutamente inhabilitados para ser admitidos o permanecer en el país en cualquier categoría migratoria, y deberán ser rechazados en el momento de pretender ingresar a territorio nacional, los extranjeros que presentaren algunos de los siguientes impedimentos:

- a) Estar cumpliendo condena por delitos cometidos en el exterior que merezcan para la legislación argentina, pena privativa de libertad de tres (3) años o más;
- b) Traficar o haber traficado con estupefacientes;
- c) Traficar o haber traficado con personas;
- d) Registrar antecedentes que hagan presumir la participación en actividades de lavado de dinero, contrabando de armas o inversiones en actividades ilícitas;
- e) Registrar antecedentes que hagan presumir que podría comprometer la seguridad y el sistema democrático;
- f) Haber realizado o participado de actos que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional;
- g) Haber participado de gobiernos o actos de gobierno acusados de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional;
- h) Los deportados o expulsados del país, a menos que la autoridad competente hubiera autorizado su reingreso.

Capítulo III

De los documentos

Art. 38. – Podrán obtener el documento nacional de identidad, los extranjeros con residencia permanente o temporaria.

Art. 39. – Los solicitantes de refugio, con autorización de residencia precaria, podrán obtener su documento nacional de identidad una vez reconocidos como “refugiados” por la autoridad competente o, en su defecto, al año del otorgamiento de la residencia precaria, aun

cuando no hubiera una resolución firme sobre su solicitud.

Art. 40. – Cuando se trate de extranjeros autorizados en calidad de “residentes temporarios” el documento nacional de identidad se expedirá por el mismo plazo que corresponda a la subcategoría migratoria otorgada, renovable conforme a las prórrogas que se autoricen.

Art. 41. – En los casos precedentes, en el documento identificatorio a otorgarse, deberá dejarse expresa y visible constancia de:

- a) La nacionalidad del titular;
- b) El carácter permanente o temporario de la residencia en el país;
- c) Actuación en la que se otorgó;
- d) Plazo de la residencia autorizada y vencimiento, cuando es temporaria, o precaria en el supuesto de los refugiados.

TÍTULO III

Del ingreso y egreso de personas

Capítulo I

Del ingreso y egreso

Art. 42. – El ingreso de extranjeros al territorio nacional, cualquiera sea su categoría de admisión, se realizará exclusivamente por los lugares habilitados, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad en la cual serán sometidos al respectivo control migratorio.

Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina. En estos casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se establezca reglamentariamente.

Art. 43. – La autoridad migratoria, en el momento de efectuar el control de ingreso, procederá a denegar el mismo a aquellos extranjeros que se encuentren incluidos en algunos de los impedimentos establecidos en el artículo 37 de la presente ley, mediante resolución fundada de acuerdo con los términos de la ley 19.549/72, el decreto 1.579/72 y sus modificaciones, con indicación de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo, autoridad ante quien deben formalizarlo, e informar asimismo de su derecho a la asistencia letrada.

Art. 44. – Los extranjeros con residencia, permanente o temporaria podrán salir y reingresar libremente del territorio nacional, mediante la sola comprobación de su identidad y condición migratoria.

Art. 45. – La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria, conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación.

Art. 46. – El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley.

Capítulo II

De las obligaciones de los medios de transporte internacional

Art. 47. – El capitán, comandante, encargado o responsable de todo medio de transporte de personas, para o desde la República, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias de un medio de

transporte serán responsables solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias.

Art. 48. – De igual forma y modo serán responsables por el cuidado y custodia de los pasajeros y tripulantes, hasta que hayan pasado el examen de contralor migratorio y sean admitidos en la República, o verificada la documentación al egresar.

Art. 49. – Al rehusar la autoridad migratoria la admisión de cualquier persona, el capitán, comandante, encargado o responsable del medio de transporte y de las compañías, empresas o agencias, quedarán obligados a reconducirla a su costa, a su país de origen o procedencia, o fuera del territorio de la República en el medio de transporte en que llegó, o en caso de imposibilidad, en otro medio dentro del plazo perentorio que se le fije, siendo a su cargo los gastos que ello ocasione.

Art. 50. – El capitán, comandante, encargado o responsable de un medio de transporte de personas al país, o desde el mismo o en el mismo, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o la compañía, empresa o agencia propietaria, consignataria, explotadora o responsable, quedan obligados solidariamente a transportar a su cargo, en el plazo que se le fije, fuera del territorio argentino, o hasta el lugar de frontera, a todo extranjero cuya expulsión resuelva y su transporte disponga el juez competente, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Art. 51. – Los artículos precedentes no serán de aplicación en el supuesto de extranjeros que soliciten el status de refugio en el país; en estos casos, la obligación para las personas que describen los artículos 49 y 50 se reducirá a dar cuenta de inmediato de tal situación a la autoridad con competencia en materia de refugio.

Art. 52. – La obligación de transporte establecida en los artículos 49 y 50 se limitará a:

- a) Una (1) plaza por viaje, cuando la capacidad del medio de transporte no exceda de cincuenta (50) plazas en los medios internacionales aéreos, marítimos, fluviales o terrestres y en los de carácter interno, cuando la capacidad no exceda de treinta (30) plazas;
- b) Dos (2) plazas cuando la capacidad del medio de transporte fuera superior a la indicada para cada caso en el inciso a).

Art. 53. – El límite dispuesto por el artículo anterior no regirá cuando las personas a transportar:

- a) Integren un grupo familiar;
- b) Deban ser transportadas por la misma compañía a la cual pertenece el medio en el que ingresaron;
- c) Sean de la nacionalidad del país de bandera o matrícula del medio en que se efectuará el transporte.

Art. 54. – Las obligaciones emergentes de los artículos 49, 50, 52 y 53 serán consideradas carga pública.

Art. 55. – El incumplimiento de las disposiciones del presente título será sancionado por la Dirección Nacional de Migraciones con multa de \$ 500 (quinientos pesos) a \$ 50.000 (cincuenta mil pesos) por cada pasajero o tripulante, atendiendo al medio de transporte, la solvencia del infractor y las demás circunstancias vinculadas con la motivación del hecho, y los antecedentes y reincidencias, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Capítulo III

De la interdicción provisoria de salida

Art. 56. – En los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 49, 50, 52 y 53 de la presente, la autoridad de aplicación podrá disponer la interdicción provisoria

de salida del territorio nacional o aguas jurisdiccionales argentinas, del medio de transporte correspondiente.

La misma se hará efectiva por medio de la Policía Migratoria Auxiliar o la autoridad nacional con jurisdicción sobre el transporte.

Capítulo IV

De las cauciones

Art. 57. – Podrán imponerse cauciones en efectivo o documentarias a las empresas, compañías o agencias propietarias, consignatarias, explotadoras o responsables de cualquier medio de transporte, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de reconducir o transportar que se dicten en virtud de lo dispuesto por la presente ley.

Art. 58. – El Ministerio del Interior establecerá el monto de las cauciones y las modalidades, plazos y condiciones de su prestación, así como los requisitos para su cancelación, devolución o percepción.

TÍTULO IV

De la permanencia de los extranjeros

Capítulo I

Del trabajo y alojamiento de los extranjeros

Art. 59. – Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes permanentes” podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes temporarios” podrán desarrollarlas sólo durante el período de su permanencia autorizada.

Art. 60. – Los extranjeros admitidos o autorizados como “no residentes” no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, salvo que fueran expresamente autorizados por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la presente ley o en convenios de migraciones suscritos por la República Argentina. Los extranjeros a los que se le hubiera autorizado una residencia precaria podrán ser habilitados para trabajar por el plazo y con las modalidades que establezca la autoridad competente.

Art. 61. – Los extranjeros que residan irregularmente en el país no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia.

Asimismo, ninguna persona de existencia visible o ideal, pública o privada, podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente.

Art. 62. – No podrá proporcionarse alojamiento a título oneroso a los extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país.

Art. 63. – Los extranjeros están en la obligación de comunicar a las autoridades nacionales por la vía que se indique en la reglamentación, todo cambio de domicilio o residencia, dentro de los ocho días posteriores a su traslado.

Capítulo II

De las responsabilidades y obligaciones de los dadores de trabajo y alojamiento

Art. 64. – La aplicación de la presente ley no eximirá al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria; asimismo, en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros, como consecuencia de los trabajos ya realizados, cualquiera

sea su condición migratoria.

Capítulo III

De la responsabilidad de los otros sectores

Art. 65. – Quien contrate o convenga con extranjeros que residan irregularmente en el país, la adquisición, venta o constitución de gravamen sobre bienes inmuebles, derechos o muebles registrables, o la constitución o integración de sociedades civiles o comerciales, deberá comunicarlo fehacientemente a la autoridad migratoria.

Art. 66. – Los actos celebrados con los requisitos formales inherentes a los mismos, aun cuando no se cumpliera con la exigencia del artículo anterior, serán considerados válidos.

TÍTULO V

De la regularidad e irregularidad de la permanencia

Capítulo I

De la declaración de irregularidad y cancelación de la permanencia

Art. 67. – Considérase irregular el ingreso o permanencia en el territorio nacional del extranjero que se encontrase en algunas de las siguientes situaciones:

- a) Que hubiere ingresado al país por un lugar no habilitado para tales efectos;
- b) Que hubiere ingresado sin someterse al control migratorio;
- c) Que no cumpliera con las disposiciones que regulan el ingreso o la permanencia de extranjeros, según los requisitos impuestos a las categorías de admisión.

Art. 68. – Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones podrá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de ordenar su expulsión. Vencido el plazo sin que se regularice la situación, la dirección dará intervención y actuará como parte ante el juez competente para que éste proceda a disponer la medida de expulsión del territorio.

Art. 69. – La autoridad de aplicación podrá elevar ante el juez competente la solicitud para cancelar la autorización de “residentes temporario”, “no residentes” o “precarios” del extranjero que no cumpla o viole las disposiciones de la presente ley.

Art. 70. – Ningún extranjero o familiar suyo será privado de su autorización de residencia ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso.

Art. 71. – Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.

Art. 72. – La expulsión no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación nacional, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones que se le adeuden.

Art. 73. – El extranjero cuya expulsión hubiere sido declarada judicialmente por aplicación del artículo 68, no podrá reingresar al país sin expresa autorización de la Dirección Nacional de Migraciones.

Art. 74. – Será reprimido con multa de \$ 500 (pesos quinientos) a \$ 20.000 (pesos veinte mil) al extranjero expulsado del territorio nacional que reingrese en violación a lo dispuesto en el artículo 73. La pena se duplicará si, además, el reingreso se produjere por lugar no habilitado o eludiendo el control migratorio.

Art. 75. – El interesado deberá contar con oportunidad razonable, antes o después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje desde el puesto de salida hasta su lugar de destino.

Art. 76. – La Dirección Nacional de Migraciones únicamente podrá disponer la cancelación de residencia “temporaria” del extranjero y la pérdida de la condición migratoria en los siguientes casos:

- a) Cuando resulte condenado por delito doloso o por delito culposos que implique una pena privativa de la libertad mayor de tres años;
- b) Cuando incurriere en la causal prevista en el artículo 73 de esta ley;
- c) Cuando mediante la presentación de documentación falsa, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se hubiere gestionado la obtención de estos estados migratorios.

Art. 77. – El extranjero al que se le hubiere cancelado la residencia temporaria deberá abandonar el territorio nacional en el plazo que fije la autoridad de migración a tal efecto.

Art. 78. – La autoridad de migración, previa sentencia judicial, podrá cancelar la categoría de “no residente” acordada, cuando se desnaturalizaran los motivos que se tuvieron en cuenta para otorgarla.

Art. 79. – A aquellos extranjeros a quienes se impidiere hacer abandono del país por disposición judicial, la autoridad de migración les concederá autorización de “residencia precaria”. En tal caso, se le deberá proveer de alojamiento y manutención necesaria, si el extranjero no contara con medios suficientes para hacerlo por sí mismo.

Art. 80. – Los extranjeros comprendidos en las previsiones de los artículos precedentes, deberán comunicar a la autoridad de migraciones su domicilio.

Art. 81. – La violación a lo dispuesto en el artículo 61, párrafo segundo, de la presente ley será sancionado con multa de \$ 500 (pesos quinientos) a \$ 50.000 (pesos cincuenta mil) por cada extranjero al que se proporcione trabajo u ocupación remunerada.

El monto de la sanción a imponer se duplicará cuando el trabajador sea menor de 14 años, sin perjuicio de las sanciones penales pertinentes.

Dichas medidas no afectarán en ningún modo los derechos que correspondan a los trabajadores migrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones.

Sin perjuicio de la sanción penal que corresponda, y ante la sola comprobación de transgresión a lo dispuesto en el artículo 62, se aplicará una multa de \$ 500 (pesos quinientos) a \$ 10.000 (pesos diez mil) al locador que abusare de la condición de indocumentado de su inquilino, ocupante o subocupante.

A los efectos de la graduación de las multas se considerará la solvencia económica del infractor.

Art. 82. – Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes en la materia y en caso de reincidencia en las infracciones a la presente ley, las mismas serán acumulativas y progresivas.

Art. 83. – En caso de reincidencia o gravedad manifiesta en las infracciones a lo establecido en los artículos 61, segundo párrafo, y 62, el juez competente podrá disponer la inspección de contralor migratorio en los lugares de trabajo, alojamiento u hospedaje donde se hubieren verificado. La misma se hará efectiva por la autoridad de migración, con intervención de la Policía Migratoria Auxiliar.

Capítulo II

De las medidas cautelares

Art. 84. – Las personas, compañías, empresas, asociaciones o sociedades que solicitaren el ingreso, la permanencia o la regularización de la situación migratoria de un extranjero en el país, deberán presentar caución suficiente, de acuerdo a lo que establezca la autoridad de migración, pudiendo ser dispensadas de la misma.

TÍTULO VI

Del régimen de los recursos

Capítulo I

Art. 85. – Podrán ser objeto de revisión en sede administrativa y judicial los actos administrativos dictados por la autoridad de migración que resuelvan sobre:

- a) La cancelación de la autorización de residente temporario o no residente;
- b) La conminación a un extranjero a hacer abandono del país;
- c) La denegatoria (expulsión) de ingreso del extranjero al territorio;
- d) La aplicación de multas;
- e) Decisiones que lesionen intereses legítimos o causen agravios;
- f) El depósito de cauciones.

Art. 86. – Podrán ser objeto de “recurso de reconsideración” los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas precedentemente.

Dicho recurso se interpondrá contra los actos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta.

En el caso de que el acto hubiese sido dictado por autoridad delegada, ésta será quien resuelva, sin perjuicio del derecho de avocación de la mencionada dirección, salvo que la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto en el cual resolverá el delegante.

El recurso de reconsideración deberá deducirse dentro de los 10 (diez) hábiles días de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano que lo dictó.

Art. 87. – La autoridad competente deberá resolver el recurso de reconsideración deducido, dentro de los treinta (30) días hábiles de su interposición. Vencido dicho plazo sin que hubiere una resolución al respecto, podrá reputarse denegado tácitamente, sin necesidad de requerir pronto despacho.

Art. 88. – El recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio. Conforme a ello, cuando la reconsideración hubiese sido rechazada –expresa o tácitamente– las actuaciones deberán elevarse al Ministerio del Interior dentro del término de cinco (5) días hábiles, de oficio –supuesto de denegatoria expresa– o a petición de parte –supuesto de silencio–.

Dentro de los (5) días hábiles de recibida por el superior, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.

Art. 89. – Los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas en el artículo 85, podrán también ser objeto del recurso jerárquico a interponerse ante la autoridad emisora del acto recurrido dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación fehaciente, y será elevado de oficio y dentro del término de cinco (5) días hábiles al Ministerio del Interior.

El organismo citado deberá resolver el recurso jerárquico dentro de los (30) días hábiles contados desde la recepción de las actuaciones.

La interposición del recurso jerárquico no requiere la previa deducción del recurso de

reconsideración. Si se hubiere interpuesto éste, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico.

Art. 90. – La interposición de recursos administrativos en los casos previstos en el artículo 85, suspenderá la ejecución de la medida dictada hasta tanto la misma quede firme.

Art. 91. – En los casos no previstos en este título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la ley 19.549/72, el decreto 1.759/72 y sus modificaciones.

Art. 92. – Agotada la vía administrativa a través de los recursos de reconsideración y jerárquico, queda expedita la vía judicial, siendo competentes para entender en estas cuestiones, los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal y/o los juzgados federales del interior del país.

El plazo para la interposición de la demanda respectiva, será de treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación fehaciente al interesado, siendo por lo demás de aplicación el procedimiento legislado en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.

Art. 93. – La parte interesada podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho, la cual será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que exceda lo razonable para dictaminar. Presentado el pedido, el juez debe expedirse sobre su procedencia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, de entenderlo procedente, requerirá a la autoridad administrativa interviniente un informe acerca de las causas de la demora invocada, fijándole para ello un plazo. La decisión judicial será inapelable.

Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo sin haber obtenido la resolución pertinente, se resolverá lo que corresponda con relación a la mora, librando –en su caso– la orden correspondiente a fin de que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se establezca de acuerdo con la naturaleza y complejidad del caso pendiente.

Art. 94. – Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además tendrán derecho a la asistencia de intérprete/s si no comprenden o hablan el idioma oficial. Las reglamentaciones a la presente que, en su caso se dicten, deberán resguardar el irrestricto ejercicio del derecho constitucional de defensa.

Capítulo II

De la revisión de los actos decisorios

Art. 95. – El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones podrán rever, de oficio o a petición de parte, sus resoluciones y las de las autoridades que actúen por delegación. Serán susceptibles de revisión las decisiones cuando se comprueben casos de error, omisión o arbitrariedad manifiesta, violaciones al debido proceso, o cuando hechos nuevos de suficiente entidad justifiquen dicha medida.

Art. 96. – Las resoluciones del Ministerio del Interior serán apelables ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal y/o juzgados federales del interior del país.

Capítulo III

Del cobro de multas

Art. 97. – Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto por la presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo, en el lugar y forma que determine el Ministerio del Interior.

Art. 98. – Las multas impuestas serán destinadas a la cuenta especial “Ministerio del

Interior - Dirección Nacional de Migraciones”.

Art. 99. – La Dirección Nacional de Migraciones promoverá la acción judicial, por vía de ejecución fiscal, de las multas firmes impuestas de acuerdo con la presente ley, que no fueran abonadas en término. La certificación emanada de dicho organismo será título ejecutivo suficiente a tal fin, y será competente la justicia federal en lo contencioso Administrativo del lugar en que se cometa el hecho que de lugar a la sanción.

Art. 100. – A los fines previstos en el artículo anterior, y en los casos en que deba presentarse ante jueces y tribunales, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá personería para actuar en juicio.

Art. 101. – Los domicilios constituidos en las respectivas actuaciones administrativas serán válidos en el procedimiento judicial.

Capítulo IV

De la prescripción

Art. 102. – Las infracciones reprimidas con multas, prescribirán a los dos (2) años.

Art. 103. – La prescripción se interrumpirá por la comisión de una nueva infracción o por la secuela del procedimiento administrativo o judicial.

TÍTULO VII

De los delitos migratorios

Capítulo I

De los delitos migratorios

Art. 104. – Será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años el que promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina.

Art. 105. – Será reprimido con prisión o reclusión de dos a ocho años el que realice las conductas descritas en el artículo anterior con ánimo de lucro, o empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de necesidad o inexperiencia de la víctima.

Art. 106. – Las penas descritas en los artículos anteriores serán de tres a ocho años cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

- 1. Se hiciere de ello una actividad habitual.**
- 2. Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones. En este caso se impondrá además inhabilitación absoluta perpetua.**
- 3. Se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima fuere menor de edad.**

TÍTULO VIII

De las tasas

Capítulo I

Tasa retributiva de servicios

Art. 107. – La tasa aplicable a la obtención de la residencia en ningún caso podrá exceder el 20 % del salario mínimo vigente.

Art. 108. – Por los servicios de inspección o contralor migratorio que se presten a los medios de transporte internacional que lleguen o que salgan del país, se abonarán las habilitaciones por servicios extraordinarios que fije el Poder Ejecutivo, cuando:

- a) Fueren prestados en travesía;**
- b) Se realicen fuera de las horas y días hábiles que a tal efecto se determine, o del asiento**

habitual de la autoridad que debe prestarlos.

Art. 109. – Los fondos provenientes de las tasas percibidas de acuerdo con la presente ley serán depositados en la cuenta especial mencionada en el artículo 98.

TITULO IX

De los argentinos en el exterior

Art. 110. – El gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los migrantes la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina.

Art. 111. – Todo argentino con más de dos (2) años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir los bienes de su pertenencia destinados a su actividad laboral libre de derechos de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, así como su automóvil, efectos personales y del hogar hasta el monto que determine la autoridad competente.

Art. 112. – Las embajadas y consulados de la República Argentina deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los argentinos en el exterior de las franquicias y demás exenciones para retornar al país.

TITULO X

De la autoridad de aplicación

Capítulo I

De la autoridad de aplicación

Art. 113. – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones.

Art. 114. – Créanse el Consejo Nacional de Migraciones y el Foro Argentino para la Integración Social de los Inmigrantes como órganos auxiliares de asesoramiento y coordinación.

Art. 115. – Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, prestándoles ayuda en la medida de sus posibilidades.

Capítulo II

De la Dirección Nacional de Migraciones

Art. 116. – La Dirección Nacional de Migraciones tendrá las siguientes funciones:

- a) Conceder las visas de ingreso previstas en las categorías de admisión que establece la presente ley;**
- b) Otorgar prórrogas de permanencia a los extranjeros que hubieran ingresado al país;**
- c) Otorgar cambios de categoría a los extranjeros que hubieran ingresado como temporarios o no residentes;**
- d) Regularizar, cuando corresponda, la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros que residan en situación irregular;**
- e) Fiscalizar el ingreso y egreso internacional de personas;**
- f) Proceder a la no admisión de los extranjeros que intenten ingresar al país, en los casos en que corresponda según la presente ley;**
- g) Declarar irregular el ingreso o permanencia de extranjeros cuando no pudieran probar**

su situación migratoria legal en el país, e intimarlos a su efectiva regularización;

- h) Declarar la pérdida de la condición de “residente”, cuando así corresponda;**
- i) Cancelar los permisos de permanencia de los extranjeros, en los casos señalados por esta ley;**
- j) Actuar como parte ante la Justicia cuando entienda que corresponda expulsión o deportación de los extranjeros según las causales previstas en la presente ley;**
- k) Otorgar permisos de salida y de reingreso, a los extranjeros, si correspondiere;**
- l) Determinar la condición de refugiado de acuerdo con la ley y los convenios internacionales, resolver sobre estas solicitudes y otorgar la documentación que corresponda a los refugiados. Asimismo, otorgar la credencial respectiva a los asilados políticos;**
- m) Llevar el registro y control informático, digital y computarizado de entrada y salida de pasajeros nacionales y extranjeros;**
- n) Habilitar, previo decreto del Poder Ejecutivo, nuevos lugares para el ingreso o egreso del país de nacionales o extranjeros, para lo cual dispondrá la efectivización del correspondiente control migratorio, por medio de sus propios oficiales o de aquellos en quienes se delegue dicha función;**
- ñ) Inspeccionar los medios de transporte internacional, para aplicar las normas vigentes relativas a la entrada y salida del país de extranjeros y tripulantes;**
- o) Verificar el pago de los derechos fiscales que deben abonarse de acuerdo con la naturaleza de los trámites;**
- p) Impedir la salida del territorio nacional o de aguas territoriales a los medios de transporte que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta ley;**
- q) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, a fin de verificar posibles infracciones relacionadas con la condición migratoria de los extranjeros;**
- r) Descentralizar funciones a las provincias o los municipios que registren población migrante, en tantas oficinas migratorias como sean necesarias;**
- s) Difundir a través de los consulados argentinos, puestos fronterizos y otros organismos los requisitos y condiciones para trabajar y alojarse en la República Argentina;**
- t) Establecer y hacer funcionar mecanismos y sistemas de información que permitan el monitoreo sistemático de la presencia en el territorio nacional de trabajadores migrantes empleados ilegalmente y la existencia de movimientos migratorios con fines de empleo provenientes de o con destino al territorio nacional, o en tránsito por éste, en los cuales los migrantes se vean sometidos durante el viaje, a su llegada o durante su permanencia y empleo, a condiciones que infrinjan la legislación nacional y los convenios internacionales en vigor para la Argentina;**
- u) Elaborar el “Reglamento de Migraciones”;**
- v) Las restantes que tengan relación directa con la dirección y el control del movimiento migratorio en el país.**

Art. 117. – La verificación por la autoridad migratoria de la identidad de los extranjeros será realizada con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.

Art. 118. – El Ministerio del Interior podrá delegar el ejercicio de las funciones y facultades de la Dirección Nacional de Migraciones en las instituciones que constituyan la Policía Migratoria Auxiliar o en otras autoridades, nacionales o provinciales, las que actuarán conforme a las normas y directivas que aquélla les imparta.

Art. 119. – Los gobernadores de provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de agentes naturales del gobierno federal, proveerán lo necesario

para asegurar el cumplimiento de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, y designarán los organismos que colaborarán para tales fines con la Dirección Nacional de Migraciones.

Art. 120. – La Dirección Nacional de Migraciones, mediante convenio con los municipios donde no exista una sede de la oficina migratoria, habilitará en cada uno de ellos una delegación que tendrá a su cargo la recepción y el diligenciamiento completo del trámite migratorio para los extranjeros con domicilio en cada distrito municipal.

Art. 121. – Los juzgados federales deberán comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las cartas de ciudadanía otorgadas en un plazo no mayor de treinta (30) días, para que ésta actualice sus registros.

Art. 122. – Las autoridades competentes que extiendan certificado de defunción de extranjeros deberán comunicarlo a la Dirección Nacional de Migraciones en un plazo no mayor de quince (15) días, para que ésta actualice sus registros.

Art. 123. – Las autoridades judiciales que iniciaren un proceso contra un extranjero deberán comunicarlo a la Dirección Nacional de Migraciones en un plazo no mayor de quince (15) días. Asimismo enviarán copia de la resolución en la que se define la situación jurídica del imputado y del fallo que se dicte.

Capítulo III

Del Consejo Nacional de Migraciones

Art. 124. – Créase el Consejo Nacional de Migraciones, órgano de colegiado de asesoramiento dependiente del Ministerio del Interior.

Art. 125. – El Consejo Nacional de Migraciones estará integrado por un representante titular de cada uno de los siguientes ministerios y secretarías:

- Ministerio del Interior, quien tendrá a su cargo la presidencia.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Ministerio de Desarrollo Social.
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Economía.
- Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Defensa.
- Ministerio de Educación.

Los integrantes del Consejo deberán poseer experiencia y capacitación en el tema. Durarán dos años en sus funciones.

Art. 126. – El Consejo Nacional de Migraciones tendrá las siguientes funciones:

- a) Asesorar al ministro del Interior y a la Dirección Nacional de Migraciones en materia de orientación, objetivos, formulación y coordinación de las políticas migratorias;
- b) Establecer las bases y criterios sobre los que se asentará una política global en materia de integración social y laboral de los inmigrantes, para lo cual recabará información y consulta de los órganos administrativos, tanto del ámbito estatal como de los agentes sociales y económicos implicados con la inmigración y la defensa de los derechos de los extranjeros;
- c) Proponer criterios para la atracción y retención de migrantes en función de las estrategias de desarrollo nacional;
- d) Promover y fomentar el estudio de los problemas relativos a las migraciones;

- e) Actuar como órgano consultivo para dirimir dudas y solucionar casos no contemplados relativos a la admisión de inmigrantes;**
- f) Emitir opinión sobre propuestas en materia de legislación migratoria;**
- g) Elaborar su reglamento interno, a ser aprobado por el Ministerio del Interior;**
- h) Proponer y estudiar tratados bilaterales y multilaterales de migración, así como dentro del ámbito del Mercosur.**

Las deliberaciones del Consejo Nacional de Migraciones adoptarán la forma de resolución.

Capítulo IV

De la Policía Migratoria Auxiliar

Art. 127. – La Policía Migratoria Auxiliar quedará integrada por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica Nacional y la Policía Federal, las que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración .que les requiera.

Art. 128. – El Ministerio del Interior podrá convenir con los gobernadores de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la realización de funciones de Policía Migratoria Auxiliar en sus respectivas jurisdicciones y las autoridades u organismos provinciales que la cumplirán.

Capítulo V

Del Foro Argentino para la Integración Social de los Migrantes

Art. 129. – Créase en el ámbito del Ministerio del Interior el Foro Argentino para la Integración Social de los Inmigrantes.

Estará integrado, de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las administraciones públicas, nacionales, provinciales y municipales, de las asociaciones de inmigrantes y de las organizaciones sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales con interés en el ámbito inmigratorio.

Constituye un órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes.

Estará presidido por el presidente del Consejo Nacional de Migraciones. Reglamentariamente se determinará su composición, competencias y régimen de funcionamiento.

Disposiciones transitorias

Art. 130. – Los inmigrantes de origen peruano y boliviano que se hubieran acogido oportunamente a los Programas de Flexibilización Migratoria a través de las resoluciones 3.850/94 y 2.912/96, respectivamente y sus prórrogas, y que aún no hubieran completado sus trámites, quedan igualmente comprendidos en los términos y condiciones de esta ley. El mismo régimen se aplicará a los inmigrantes procedentes de los países de Europa central y oriental (resolución 4.632/94 y sus prórrogas). Asimismo quienes no hubieran ingresado al régimen de las leyes 25.098 y 25.099, podrán acogerse al beneficio de esta ley.

Disposiciones complementarias

Art. 131. – Derógase la ley 22.439 y sus decretos reglamentarios 1.023/94 y 1.117/98 y toda otra norma contraria a la presente.

Art. 132. – El reglamento de aplicación de la presente ley, en adelante “Reglamento de Migraciones”, deberá entrar en vigencia a los 180 días de promulgada ésta. Será elaborado por la autoridad de aplicación con la participación del Consejo Nacional de Migraciones en los términos de las atribuciones que le otorga la presente ley.

Art. 133. – Ninguna de las disposiciones de la presente ley se interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada.

Art. 134. – Ninguna de las disposiciones de la presente ley tendrá por efecto eximir a los extranjeros de la obligación de cumplir con la legislación nacional ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los argentinos.

Art. 135 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Las migraciones internacionales constituyen un proceso social complejo ligado históricamente al desarrollo de las naciones. El debate actual sobre ellas debe enmarcarse necesariamente en el análisis del creciente proceso de globalización que experimenta la economía mundial. Este proceso ha derivado en una profundización de los desequilibrios mundiales, con diferencias entre los países cada vez más abismales. Si consideramos los cuarenta países más ricos y los cuarenta países más pobres, encontramos que el segundo grupo produce cerca de un cinco por ciento del producto bruto nacional del primero. En otras palabras, la población de los primeros cuarenta países tiene una parte de “la torta” veinte veces mayor que la compartida por el número equivalente de las naciones más pobres.

Esta polarización de la riqueza trae aparejada una serie de conflictos y contradicciones que tienen un impacto directo sobre el fenómeno migratorio. Por un lado gran parte de la población mundial de los países menos favorecidos mira a los países ricos como su última esperanza de alcanzar un aumento en su calidad de vida. Asimismo, existen fuertes reacciones de muchos sectores sociales de estos países que ven con recelo a los inmigrantes y los convierten fácilmente en chivos expiatorios de sus males (desocupación, delincuencia, etcétera). Esta reacción ha llevado a las distintas naciones receptoras de migrantes a endurecer sus políticas migratorias, intentado cerrar sus fronteras a la inmigración, presionados por las crisis económicas y sociales y por el auge de expresiones xenófobas y racistas.

“Las migraciones se originan en las regiones en que la población sufre mayor presión (económica, social, demográfica y política, en ese orden de importancia) y tiende a dirigirse hacia los países en los que se presumen mejores oportunidades de desarrollo individual, ya sea legal o ilegal. A la larga, si los estadounidenses no quieren que los mexicanos crucen el río Bravo a nado, si los alemanes no quieren que en sus ciudades se hable turco, si los españoles no desean llenarse de moros, los italianos, de albaneses y los argentinos, de bolivianos, todos ellos tendrán que pagar el precio de su intolerancia disminuyendo la tensión –esto es, la desigualdad económica– entre las regiones ciclónicas y anticiclónicas de la migración internacional. La solución autoritaria que hasta ahora se ensaya, fundada en fronteras y guardias armados, no es capaz de dar solución duradera al problema de las regiones más ricas.”¹

Constatada esta realidad, vemos sin embargo que en un mundo en el que las tendencias que marcan la época se expresan en la creciente y libre circulación de capitales y mercancías; en la internacionalización de las comunicaciones y de la cultura; en la pérdida de significación de la noción clásica de los Estados nación; en la formación de grandes bloques económicos multinacionales y en la creación de organismos y competencias jurídicas supranacionales; resulta contradictorio y paradójico a la vez que no sea posible aún hablar de una libre circulación de las personas. Y por paradójico que parezca, lo real es que el concepto neoliberal de libre mercado en un mundo cada vez más interdependiente, todavía no logra aplicarse a la libertad de circulación de la fuerza de trabajo.²

Desde nuestro punto de vista, así como los mercados mundiales y los desplazamientos del

capital financiero deben estar sujetos a una regulación internacional para evitar los efectos negativos de la globalización, también los flujos migratorios internacionales requieren de una gobernabilidad que atienda a las verdaderas causas que los originan. En este caso gobernabilidad consiste en el ajuste entre las expectativas y demandas sociales, por una parte, y las posibilidades reales del Estado para darles respuesta por la otra 3. En las migraciones la gobernabilidad se fundamenta en la capacidad institucional de los Estados para actuar sobre los movimientos migratorios de acuerdo a las políticas que se definan.

Resulta necesario diseñar formas de gobernabilidad de la migración de modo que, más allá de los criterios unilaterales de control o restricción de los movimientos, puedan arbitrase medidas concertadas a escala internacional. Debemos para ello abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva realista, lo que significa no manejarse con mitos sino con realidades y hacer el esfuerzo de analizar el fenómeno desde una posición objetiva.

La realidad en que debemos hacer aplicables estos conceptos en parte difiere del desarrollo histórico que ha tenido el proceso migratorio en nuestro país. En los últimos diez años, el flujo migratorio hacia la Argentina no ha sido de gran intensidad. Si bien no existen cifras oficiales, distintos estudios señalan que sería de alrededor de cien mil personas por año aproximadamente, en general proveniente de los países limítrofes. No sólo en comparación con el flujo de inmigración del siglo pasado sino también en relación al total de la población actual del país, este fenómeno es relativamente relevante desde el punto de vista cuantitativo.

En virtud de ello, ¿es correcto visualizar al migrante como el responsable del crecimiento de las tasas de desempleo? ¿Podemos señalar a los inmigrantes de los países limítrofes como los culpables del alarmante aumento de la delincuencia en la Argentina? Los datos empíricos disponibles de organismos oficiales como el INDEC, el Ministerio de Justicia y trabajos realizados por diversos investigadores dan sin duda una respuesta negativa a dichos interrogantes.

La cruel verdad es que los que deciden migrar huyen de la miseria en busca de un futuro digno en nuestro país, y la mayoría de las veces sólo encuentran ocupación en tareas riesgosas de bajos salarios o son explotados, llegando en algunos casos a la reducción a servidumbre, por inescrupulosos que abusan de la paupérrima situación social y económica en que se encuentran.

Resulta preocupante la aparición de conductas de rechazo hacia los migrantes de los países hermanos del continente, en una sociedad que históricamente ha sido receptoras de ellos y que actualmente está involucrada en un proceso de integración regional a través del Mercosur.

En los procesos migratorios históricos de la Argentina, las migraciones no tuvieron como entorno un proceso de integración, sino que respondieron a estrategias que tenían que ver con el desarrollo de proyectos políticos, económicos o sociales puramente nacionales.

La dinámica de integración, en cambio, presupone un proyecto compartido por varios países y la construcción de espacios comunes, con niveles altos de armonización jurídica y social, donde las legislaciones deben tender a la garantía cada vez mayor de la economía y del trabajo de la población de la región; donde las políticas de empleo, de formación profesional, de seguridad social, de educación y de salud pasan a ser objeto de atención conjunta y orientada hacia la compatibilización de los intereses nacionales y las necesidades como región.

Sobre todo, tiende a permitir que el ciudadano no pierda su calidad de tal en la región integrada, pudiendo ingresar, residir, prestar servicios y trabajar en cualquiera de los territorios de los países partes. En otras palabras, permite al trabajador circular libremente e insertarse en el mercado de trabajo regional fundado en su derecho de ciudadano comunitario.

Si se regionalizan las variables económicas y comerciales, ¿cuál es la racionalidad de la estrategia que circunscribe las variables sociales y culturales a los ámbitos nacionales? ¿Cuál

es el fundamento de la decisión que tiende a mantener el trabajo estático en tanto el capital – las empresas– se traslada libremente por los territorios en pos de elementos como menores costos, subsidios o situaciones financieras ventajosas?

La normativa migratoria y la normativa laboral, articuladas con aquella que garantiza la defensa de los derechos humanos, deben permitir restablecer en el país receptor aquellos derechos que una persona pierde en el acto de cruzar la frontera hacia otro territorio y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que como habitante de ese territorio tenga que asumir, hasta tanto el proceso de integración se complete y dé lugar al nuevo sujeto de la regionalización: el ciudadano comunitario.

Si el mercado mundializado llevado a su exasperación, como surge de la propuesta de la globalización, borra las fronteras y desdibuja los territorios, la regionalización los redefine en la medida necesaria no sólo a la potenciación y defensa de las economías de los países comprometidos en la conformación del bloque regional, sino también al refuerzo de la mejoría en las condiciones de vida de su población y en consecuencia de la democracia.⁴

Somos conscientes de los pasos que aún faltan dar en este sentido, pero compartimos con Umberto Eco que “no saldremos nunca de este círculo mientras no decidamos que, ante acontecimientos excepcionales, la humanidad no puede permitirse aplicar leyes vigentes, sino que debe asumir la responsabilidad de sancionar nuevas leyes”.⁵

Por ello impulsamos el presente proyecto de ley, entendiendo que la política migratoria debe otorgar suficientes garantías a la migración como derecho esencial e inalienable de toda persona, y fortalecer la integración del migrante en la estructura social del país. Lo ha formulado muy bien George Steiner: “Los árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, piernas. Y con ellas cruzan la barrera de la estulticia delimitada con alambradas, que son las fronteras; con ellas visitan y en ellas habitan entre el resto de la humanidad en calidad de invitados. Hay un personaje fundamental en las leyendas, numerosas en la Biblia, pero también en la mitología griega y en otras mitologías: el extranjero en la puerta, el visitante que llama al atardecer tras su viaje. En las fábulas, esta llamada es a menudo la de un dios oculto o un emisario divino que pone a prueba nuestra hospitalidad. Quisiera pensar en estos visitantes como en los auténticos seres humanos que debemos proponernos ser, si es que deseamos sobrevivir”.⁶

La política migratoria debe facilitar al migrante la reunión con sus familiares (derecho a la reagrupación familiar), promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia laboral, seguridad social, derechos gremiales y culturales, y libertades individuales y colectivas para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, habiten el suelo argentino.

En palabras de Lelio Mármora: “En un mundo cada vez más interdependiente, ni la economía, ni las comunicaciones, ni el medio ambiente pueden ser sostenibles en espacios nacionales cerrados. Tampoco las migraciones. No hay desarrollo sostenible sin desarrollo humano. No hay desarrollo humano sin libertad humana. No hay libertad humana si las fronteras no logran transformarse de barreras en puntos de convergencia e integración. El día que todos los países del mundo logren una armonización de intereses y una superación de prejuicios capaces de permitir a sus habitantes una circulación sin problemas, se habrá alcanzado sin dudas un nuevo hito en la historia de la humanidad”.

Desarrollo histórico y composición de los flujos migratorios en la Argentina

La mayoría de los inmigrantes europeos llegó a nuestro país entre 1870 y 1929. La crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a disminuir el volumen de los flujos de ultramar; luego se produce una segunda y última oleada durante el período de posguerra, aunque de menor magnitud que la primera.

De acuerdo con Lattes y Recchini de Lattes (1994), se estima que alrededor de 5,3 millones

de personas llegaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y 1970, cifra que representa el 38 % de la migración neta recibida en conjunto por América latina y el Caribe en ese período. El impacto migratorio sobre el poblamiento del país fue de tal importancia que se estima que la población registrada en 1960 se hubiera reducido a la mitad sin el aporte inmigratorio.

Los cambios experimentados a partir de mediados del siglo XX, tanto en el volumen como en la procedencia de los flujos migratorios, se reflejan en una disminución de la representación de los extranjeros dentro de la población que reside en el país.

La presencia de extranjeros alcanzó su máxima expresión en 1914, cuando llegaron a representar casi un tercio de la población. El porcentaje de nacidos fuera de la Argentina se reduce en 1991 al 5 %.

La incidencia de los migrantes limítrofes no ha variado a lo largo de la historia, indicando la persistencia de estos movimientos desde larga data. En 1991, constituyen el 2,6 % de los entonces 32,6 millones de habitantes del país. Actualmente, el componente migratorio tiene una incidencia insignificante en el crecimiento de la población de la Argentina, que depende básicamente de su crecimiento natural, es decir, del balance entre la natalidad y la mortalidad.

Antecedentes legislativos

La preocupación por la regulación del fenómeno migratorio se remonta muy atrás en la historia argentina. Desde la época colonial hasta el presente, tanto las políticas migratorias como su expresión legislativa, abarcaron etapas restrictivas y otras más liberales, respondiendo a las diferentes realidades socioeconómicas, políticas e ideológicas de nuestra historia.⁷

El período colonial señala una marcada política restrictiva con respecto al inmigrante, al extremo que en ningún puerto de las Indias Occidentales se admitía ningún género de trato con extranjeros, so pena de pérdida de vida y pérdida de bienes.⁸

Una de las libertades que consagraron los primeros gobiernos de la emancipación fue la del ingreso de extranjeros provenientes de países “que no estuviesen en guerra con nosotros”.⁹ Se consideró que la política migratoria debía estar relacionada con la colonizadora, es decir, con la necesidad de poblar los campos desiertos, y que eso no podía hacerse sino mediante la inmigración europea.

El primer decreto que legisla sobre la materia fue dictado el 4 de septiembre de 1812 por el Triunvirato, por inspiración de Bernardino Rivadavia, en el cual el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad, con tal que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. Se les daría a los agricultores los campos para que trabajen, y la posibilidad de introducir al país los medios para explotar la minería a los que así lo desearan. Muchos extranjeros se radicaron en Buenos Aires, la mayoría vinculados con actividades mercantiles o artesanales.

En 1820 se crea una comisión de inmigración, también a instancias de Rivadavia, con el objeto de promover en Europa la inmigración de agricultores y artesanos, y proporcionar empleo a los trabajadores que llegaran al país. Esta comisión fue suprimida mediante el decreto del 13 de abril de 1824.

El 20 de mayo de 1826 se sanciona la Ley de Enfiteusis, mediante la cual el extranjero utilizaba las propiedades públicas a cambio de un canon anual.

Pero los esfuerzos colonizadores realizados durante el período de la organización nacional, en la mayoría de los casos, no se tradujeron en realizaciones concretas.

Esta circunstancia se mantiene hasta la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853, que establece una política migratoria de puertas abiertas. Esto surge fundamentalmente de

dos preceptos, reproducidos en la Constitución de la Nación Argentina adoptada por la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe en agosto de 1994 y, por lo tanto, en vigor:

a) El Preámbulo, que fija como objeto de la Norma Fundamental: “... constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino...”.

b) La primera parte, capítulo primero “Declaraciones, derechos y garantías”, que en su artículo 25 establece: “El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

Llegamos así al denominado “Proyecto de la Generación de 1860”, caracterizado por la búsqueda de un modelo de nación que tuviera como guía a la civilización europea. Esa actitud se tradujo en políticas de desplazamiento de población aborigen y mestiza hacia el desierto y la apertura de nuestras fronteras a la inmigración europea masiva, especialmente de italianos y españoles. Estos, en poco tiempo, lograron incorporarse a la naciente sociedad moderna. En octubre de 1869 se dicta la ley 346 de ciudadanía y naturalización, aún vigente y cuyo objetivo era, precisamente, facilitar dicha integración.

Hacia 1875 se iniciaron en el Congreso de la Nación las gestiones encaminadas a crear un marco legal adecuado para captar y canalizar las corrientes migratorias que el país entendía necesitar. El Poder Ejecutivo y una comisión parlamentaria redactaron sendos proyectos que, luego de ser debatidos en las Cámaras de Diputados y de Senadores, constituyeron la primera ley de inmigración, de 1876, sancionada con el número 817 y conocida como ley Avellaneda, que reguló todo el proceso de afluencia masiva de inmigrantes al país registrado entre los años 1890 y 1914, y cuya vigencia formal se prolongó hasta el año 1981.

Al elevar el proyecto, el presidente Avellaneda señalaba: “Hasta ahora no se ha buscado la inmigración, aceptándose la que espontáneamente ha querido venir a la República, y en su internación y acomodo se invierten sumas considerables sin examen, sin calificación, sin averiguar siquiera si el inmigrante ha de ser un poblador útil que, con su trabajo, aumente la producción del país y contribuya al fomento de la riqueza pública, y al mismo tiempo sus costumbres y educación contribuyan a consolidar los elementos de civilización, de orden y de paz. En el proyecto presentado se previene este mal, pues sin incluir expresamente la inmigración espontánea se procura elegirla buscándola en el norte de Europa y otros países del sur, donde es tan fácil encontrarla en condiciones más adecuadas que aseguren para nosotros los resultados buscados”.

En línea con los preceptos constitucionales contenidos en el Preámbulo y el artículo 25, el artículo 12 de la ley define al inmigrante como “todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que, siendo menor de 60 años, y acreditando su moralidad y aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella”. La ley contiene una serie de medidas para atraer la inmigración y afincarla en el país. Su preocupación se centraba tanto en el proceso de selección como en el cuidado de las personas durante su viaje, y su recepción y colocación en condiciones lo más ventajosas posibles.

La ley 4.144, de residencia de extranjeros, de 1902, la ley 7.209, de defensa social, de 1910, y el decreto del 31 de diciembre de 1923 —que reglamentó la ley Avellaneda— constituyen los hitos fundamentales de un vuelco importante en la política proinmigrante que venía sosteniendo el Estado argentino.

La ley 4.144, de residencia de extranjeros, otorgaba al Poder Ejecutivo amplias facultades de detención y expulsión de extranjeros, no sujetas a revisión judicial. Con su sanción se

buscaba un instrumento claro, preciso y eficaz que permitiera al Poder Ejecutivo la expulsión de los extranjeros que fueran considerados como elementos *non* gratos o perjudiciales para los intereses del país.

Ocho años después de que se publicara la ley de residencia, se dicta una nueva ley, llamada también de defensa social (ley 7.029 del 28 de junio de 1910), la cual modifica parcialmente y amplía todo lo referente a la admisión y entrada de extranjeros. Esa ley fue precedida por una declaración de estado de sitio en toda la República –14 de mayo de 1910– y constituye el inicio de una política selectiva de las migraciones, en este caso concebida principalmente para combatir la ideología anarquista.

A principios de la década del '20 se produce un reflujo migratorio y la Argentina inicia una política de mayor y más completa selección de la inmigración. El decreto del 31 de diciembre de 1923, que reglamenta la ley 817, implanta normas de estricto control sobre el ingreso de extranjeros. Su único considerando responde al inciso 2 del artículo 3° de la ley 817, a través del cual se conceden al Departamento de Inmigración los deberes y atribuciones de “proteger la inmigración que fuere honorable y laboriosa, y aconsejar medidas para contener la corriente de la que fuese viciosa e inútil”.

A partir de 1930 comienzan a disminuir las corrientes migratorias masivas. Las dificultades económicas y sociales generadas por la crisis del primer tercio del siglo y la desocupación consecuente determinaron que en 1938 el Poder Ejecutivo estableciera formalmente, por decreto, la exigencia del “permiso previo de libre desembarco”, un examen selectivo de la inmigración fundamentado en la necesidad de protección moral y física, tanto de los candidatos como del país receptor y, coyunturalmente, de la mano de obra nacional. No obstante, el decreciente flujo de inmigrantes que se observa en este período parece ser más el resultado de la nueva situación internacional que consecuencia de la restrictiva política migratoria aplicada.

Alrededor de la década del '50 la inmigración de países limítrofes adquiere un mayor peso dentro de la población extranjera; se trata principalmente de migración “golondrina”, para trabajos de temporada, como la zafra, el algodón, etcétera. Finalizada la Segunda Guerra, también es activa la inmigración de colonos agricultores. En 1948 se dictó la primera regularización migratoria, y en 1952, luego del Pacto de Amistad Argentino-Chileno, se documentó a todos los extranjeros originarios de ese país.

En el decreto ley 4.905 de 1963 se limitan por primera vez los derechos otorgados a los extranjeros por la Constitución Nacional, aduciendo que no protegen a aquellos inmigrantes que han ingresado al país incumpliendo los requisitos legales.

El Reglamento de Migración (decreto 4.418/65) combina restricciones para el ingreso y la permanencia con un criterio amplio en materia de radicación.

A partir de 1966, con el llamado gobierno de la Revolución Argentina, la normativa y el control migratorio se endurecen. En mayo de 1967 se dicta el decreto ley 17.294, denominado “Represión de la inmigración clandestina”, en el que se autoriza el despido sin indemnización de ilegales. El decreto ley 17.498 de 1967 aumenta los montos de las multas a transportistas.

En 1969, el decreto ley 18.235 autoriza al Poder Ejecutivo a expulsar a cualquier extranjero que atente contra la paz social, la seguridad nacional o el orden público.

En 1970, mediante el decreto 46, se adoptaron las “políticas nacionales”, un programa de gobierno al que debía ajustarse toda acción de los organismos del Estado. En materia de inmigración, la política número 14 se orientaba a encarar un programa de crecimiento demográfico que dotase al país de una población más numerosa, estable y regionalmente equilibrada, mediante la inmigración y su radicación; la política número 15 expresaba textualmente: “Impulsar la inmigración de carácter selectivo, procurando mantener la actual composición étnica de la población y teniendo en cuenta los requerimientos de desarrollo y de

seguridad”.

Tres decretos de 1971 legislan para los inmigrantes en situación irregular de países limítrofes a fin de facilitar su regularización: 4.419/71, que los exime o reduce el pago de la tasa de radicación cuando exista justificativo; 3.206/71, que les permite solicitar la radicación temporaria por un año; y el decreto 682/71, que también permite a los que cuenten con menos de tres años de residencia iniciar el trámite de regularización y al mismo tiempo obtener permiso para trabajar y alojarse.

Con el advenimiento de la democracia en 1973, un diagnóstico explícito de la situación poblacional, contenido en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, aprobado por decreto 776 de 1973, da lugar a nuevos objetivos en la materia, entre los cuales se cuentan los de aumentar y orientar la inmigración, reducir la emigración, crear condiciones que contengan las migraciones internas que afectan a las provincias del Noroeste, Nordeste, Centro y Cuyo; promover migraciones externas e internas hacia dichas provincias y las del sur de la República, y poblar la zona de fronteras, preferentemente con argentinos. Las políticas migratorias se ubicaban así en el contexto más amplio de las políticas poblacionales y éstas, a su vez, eran contempladas en el plan de gobierno.

En marzo de 1974 se crea la Comisión Nacional de Política Demográfica, con la misión de proyectar una política nacional de población e intensificar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la población argentina y su más adecuada distribución regional. La comisión estaba presidida por el ministro del Interior e integrada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Defensa, Economía, Cultura, Trabajo y Bienestar Social.

Instalada una nueva dictadura en el país, se aprueba, mediante el decreto 3.038 del 29 de diciembre de 1977, un conjunto de políticas y objetivos nacionales de población, indicándose el escaso volumen y la distorsionada distribución como impedimentos para nuestra plena realización como Nación. La norma se propone incrementar la inmigración extranjera saludable y culturalmente integrable, prefiriéndose aquella calificada y con capital propio. En relación con los limítrofes se propone organizar un régimen de ingreso que permita su selección y encauzamiento.

Llegamos finalmente a la ley 22.439 del 23 de marzo de 1981. Se denomina Ley General de Migraciones y de Fomento a la Inmigración. Afirma el fomento de la inmigración de aquellos extranjeros “cuyas características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina”, define tres categorías de ingreso (residentes permanentes, temporarios y transitorios) y recoge la definición de ilegalidad por ingreso o por permanencia. Tiene una sección de disposiciones que recortan los derechos civiles de los migrantes con permanencia ilegal. Además de extender la obligatoriedad de la denuncia a hospitales, centros asistenciales, escribanos, etcétera, impide el ingreso a la escuela de todo estudiante que no acredite “para cada curso lectivo, su calidad de residente permanente o temporario habilitado”.

El decreto reglamentario 1.434, del 31 de agosto de 1987, fija pautas para la aplicación de la política migratoria y además reglamenta la ley 22.439. La norma establece las zonas prioritarias a poblar, los montos de las franquicias y bienes que se permite introducir a los inmigrantes y los recursos del Fondo Nacional de Poblamiento. Los 180 artículos del Reglamento de Inmigración profundizan la tendencia de delegar en la Dirección Nacional de Migraciones la fijación de la política. Resulta fundamental el artículo 15, donde se fija una clara política migratoria restrictiva.

Ese mismo año, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso por resolución 2.478 que sólo se concederá permiso de ingreso o residencia en carácter permanente o temporario a los extranjeros que, no encontrándose migratoriamente inhibidos, acrediten ser inmigrantes con capital propio suficiente como para el desarrollo de una actividad comercial, industrial, agropecuaria, minera o pesquera, circunstancia que deberá acreditar a juicio de la Dirección Nacional, siempre que la actividad fuera de interés para el país. Obviamente, los inmigrantes

límites rara vez pueden incluirse en alguna de las categorías admitidas.

Posteriormente, la Dirección Nacional de Migraciones dictó otra resolución a fin de que los criterios de admisión establecidos se aplicaran con un criterio más amplio cuando se tratara de inmigrantes de origen europeo. Vale decir que los europeos, por esa sola condición, pueden obtener permiso de residencia definitiva o temporaria, asumiendo que por sus especiales condiciones o circunstancias personales, revisten un especial interés para el país.

En 1992, por decreto 1.013 se incorpora al reglamento una disposición por la cual el Ministerio del Interior, previo al otorgamiento de la radicación definitiva, deberá tener a la vista información acerca de antecedentes internacionales policiales y judiciales del peticionante.

El decreto 277 de 1993 autoriza a la Secretaría de Población y a la Subsecretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior a realizar en todo el territorio nacional operativos conjuntos de control, y permite la expulsión inmediata de todo extranjero sorprendido *in fraganti* cometiendo un delito de acción pública, así como a los ocupantes de inmuebles que no justifiquen su derecho a la posesión o la tenencia.

El decreto reglamentario 1.023 de 1994 fija nuevos criterios de admisión que, entre otras disposiciones, requieren la existencia de un contrato de trabajo con firmas certificadas como requisito para el trámite de residencia. Dadas las modalidades de trabajo en que se desenvuelve gran parte la población del país, incluidos los migrantes (trabajo en negro, subempleo o sector informal), este requisito constituye una seria valla para la regularización.

El decreto 1.117 de 1998 amplía la competencia de la Dirección Nacional de Migraciones, derogando la facultad que tenían las autoridades consulares para resolver la admisión de extranjeros en el exterior, cuando era solicitada por personas que los contrataban para trabajar en nuestro país; crea una tasa de 200 pesos para la solicitud de admisión e impide cambiar de categoría transitoria a temporaria estudiante o temporaria trabajador contratado.

Del análisis de todas las normas mencionadas surge una diferente respuesta de gobiernos democráticos y militares a la inmigración. Los gobiernos constitucionales otorgaron desde 1948 normas generosas de excepción, posibilitando a los inmigrantes regularizar su situación. Pero han sido los gobiernos militares los que han formulado normas de fondo, que permanecen vigentes aun cuando ellos han abandonado el control del aparato estatal.

En síntesis, lo que hoy tenemos es una normativa que no responde a las nuevas formas de funcionamiento de la economía y los mercados laborales, ni a los desafíos y demandas que surgen del proceso de integración en el cual la Argentina está comprometida; que no garantiza derechos fundamentales, que otorga al Poder Ejecutivo facultades discrecionales no susceptibles de revisión judicial, y que se materializa en procedimientos engorrosos y costosos que resultan inviables para quienes constituyen el núcleo fundamental de la inmigración real, los migrantes provenientes de países limítrofes y otros países hermanos de la región.

Estructura y contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley está estructurado en diez (10) títulos.

En el título preliminar se define el ámbito de aplicación y se establecen los objetivos de la política migratoria argentina, tendiendo a la integración de los extranjeros al cuerpo social en un plano de igualdad con los nacionales y a la eliminación de toda forma de discriminación, racismo y xenofobia.

El título I recoge los artículos dedicados a los derechos y libertades de los extranjeros. Se trata de una incorporación fundamental, que intenta hacer efectivos para los trabajadores migrantes y sus familias los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Nacional: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,

comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalidad residiendo dos años continuos en la Nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.

Para ello se adaptaron en lo esencial estándares contenidos en las dos convenciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con los derechos de los trabajadores migrantes: la Convención de la Migración para el Empleo de la OIT (revisada) de 1949 (Nº 97) y la Convención sobre Trabajadores Migrantes (provisiones suplementarias) de 1975 (Nº 143), así como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, instrumentos que si bien aún no han sido ratificados por la Argentina, contienen normas y principios orientadores sumamente importantes.

En el último de los instrumentos mencionados, la comunidad internacional organizada formula un mandato general, cual es la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, y atribuye a los gobiernos receptores la responsabilidad de asegurarles un trato no menos favorable que el dispensado a sus propios ciudadanos.

El capítulo I de este título incorpora la igualdad de trato y enuncia una serie de derechos que asisten a los migrantes: derechos laborales, a la seguridad social, a la atención médica, a la educación, a ser informados sobre sus derechos y obligaciones, a la libertad de movimiento, de asociación para el fomento y protección de sus intereses, la posibilidad de participar o ser consultados en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades donde residan, a la reunión con sus familiares. Dispone también que los extranjeros no podrán ser expulsados salvo por las razones definidas en la legislación nacional y con sujeción a un número de salvaguardias que se establecen.

Como contrapartida, los extranjeros están expresamente obligados a cumplir con la legislación nacional y respetar la identidad cultural de los argentinos. Se encomienda al Estado la obligación de adoptar las medidas apropiadas para asegurar que las situaciones de irregularidad de los migrantes no persistan.

Asimismo, se establece la obligación del Estado de garantizar niveles adecuados de información a los migrantes acerca de sus derechos y mecanismos e instancias de defensa.

Finalmente, se define la discriminación y las conductas que la tipifican, quedando garantizada la tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales.

El título II se refiere a las categorías, plazos e impedimentos de admisión. El trámite de residencia debe ser realizado de manera personal, salvo casos debidamente justificados.

Se introduce la posibilidad de coexistencia de distintos regímenes de admisión y permanencia. Al respecto, se establece que los extranjeros incluidos en acuerdos o convenios de migraciones suscritos por la República Argentina se registrarán por lo dispuesto en los mismos y por la ley en el supuesto más favorable para la persona inmigrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, de entrar en acuerdos bilaterales de alcance general y parcial, que permitan, por ejemplo, atender el fenómeno de la migración laboral fronteriza, así como la posibilidad de esquemas diferenciados de tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región respecto de aquellos países que vendrían a ser terceros dentro del proceso de regionalización.

Se facilita así el necesario acompañamiento que la política migratoria debe hacer de las políticas de integración regional, con referencia prioritaria al logro del objetivo de la libre circulación de personas en el Mercosur.

La política migratoria, desde la perspectiva laboral, debe considerar las condiciones objetivas en que hoy se desenvuelven las economías y los mercados de trabajo y su evolución posible, a fin de que pueda dar respuesta a situaciones nuevas. Si bien la Argentina se encuentra inmersa en un proceso de globalización que supera la capacidad de decisión nacional, también está inmersa en un proceso de integración por decisión política. Ese proceso de integración, que conforma un mercado único de bienes y un mercado único de capital, tiene por correlato necesario un mercado único de trabajo, que constituye un horizonte a ser alcanzado.

El título III trata del ingreso y egreso de personas, las obligaciones de los medios de transporte internacional, la interdicción provisoria de salida y las cauciones.

Se introduce la obligación para la autoridad migratoria, al denegar la entrada a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley, de hacerlo mediante resolución fundada, con indicación de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada.

El título IV trata de la permanencia de los extranjeros, del trabajo y alojamiento de los extranjeros, de la responsabilidad u obligaciones de los dadores de trabajo y alojamiento y de la responsabilidad de los otros sectores.

Desarrolla las distintas actividades o tareas remuneradas o lucrativas, por cuenta propia o en relación de dependencia, que podrán realizar los extranjeros según las categorías de residencia. Asimismo, no exime al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legislación laboral respecto del extranjero.

El título V, referido a la regularidad e irregularidad de la permanencia, sigue la premisa general del proyecto de establecer un régimen que incentive a los extranjeros a entrar, residir y trabajar en la Argentina dentro del marco de la regularidad migratoria.

La autoridad de migración, al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero, podrá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije a tal efecto, bajo apercibimiento de ordenar su expulsión. En este último supuesto, dará intervención y actuará como parte ante el juez competente para que éste proceda a disponer la medida de expulsión del territorio, siendo la jurisdicción federal la competente para el juzgamiento de las infracciones.

La autoridad de aplicación dispondrá la cancelación de la residencia temporaria cuando: *a)* Resulte condenado por delito doloso con pena privativa de libertad mayor de tres años; *b)* Cuando, habiendo sido expulsado del país, reingrese sin autorización de la Dirección Nacional de Migraciones, y *c)* Cuando, mediante la presentación de documentación falsa, ocultaciones maliciosas o cualquier ardid, se hubiere gestionado la obtención de estos estados migratorios. La autoridad de migración, previa sentencia judicial, cancelará la residencia transitoria acordada cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para otorgarla.

El título VI trata sobre el régimen de los recursos, garantizando el derecho de defensa y revisión ante la instancia judicial, de modo de salvaguardar la atribución que tiene toda persona a recurrir ante los tribunales para hacer valer sus derechos.

En el título VII, “De los delitos migratorios”, se incorporan sanciones a quienes promovieren o facilitaren el tráfico de seres humanos. Asimismo, pena al que lo realizare con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de necesidad o inexperiencia de la víctima. Las mismas se agravan cuando se hiciera de ello una actividad habitual, interviniere en el hecho un funcionario o empleado público; si hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima fuere menor de edad.

El título VIII se refiere a las tasas retributivas de servicios y se establece que la tasa para la obtención de la residencia no debe exceder del 20 % del salario mínimo vigente.

En el título IX, “Sobre los argentinos en el exterior”, se dispone que el gobierno podrá suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que fijan en el país receptor. También deberán asegurar la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la Argentina.

Finalmente, el título X se dedica a la autoridad de aplicación, que será el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se crean dos órganos auxiliares: uno de asesoramiento y coordinación en materia de diagnósticos, políticas y procedimientos migratorios, el Consejo Nacional de Migraciones; y otro de concertación y negociación para la integración social de los migrantes, el Foro Argentino para la Integración Social de los Inmigrantes.

Señor presidente, creemos imprescindible la sanción de un instrumento legal que responda adecuadamente al fenómeno migratorio actual. Los decretos que, a lo largo de los últimos años, han intentado adecuar parcialmente la ley vigente sancionada por la última dictadura militar, resultan claramente insuficientes. Necesitamos una herramienta normativa que, desde una concepción democrática y en el contexto de un proceso de integración, supere la antigua concepción de las políticas basadas exclusivamente en criterios de seguridad y control.

Mario Vargas Llosa relata en su libro *El lenguaje de la pasión*: “Los millones de personas que desde todos los rincones del mundo donde hay hambre, desempleo, opresión y violencia, cruzan clandestinamente las fronteras de los países prósperos, pacíficos y con oportunidades, violan la ley, sin duda, pero ejercitan un derecho natural y moral que ninguna norma jurídica o reglamento debería tratar de sofocar: el derecho a la vida, a la supervivencia, a escapar de la condición infernal a que los gobiernos bárbaros enquistados en medio planeta condenan a sus pueblos.

”Las políticas antiinmigrantes están condenadas a fracasar porque nunca atajarán a éstos, pero, en cambio, tienen el efecto perverso de socavar las instituciones democráticas del país que las aplica, y de dar una apariencia de legitimidad a la xenofobia y el racismo, y de abrir las puertas de la ciudad al autoritarismo.

”Los inmigrantes no pueden ser atajados con medidas policiales, por una razón muy simple: porque en los países a los que ellos acuden hay incentivos más poderosos que los obstáculos que tratan de disuadirlos de venir.

”Esta puede parecer una visión muy pesimista a quienes creen que la inmigración augura un negro porvenir a las democracias. No lo es para quien está convencido de que la inmigración de cualquier color y sabor es una inyección de vida, energía y cultura y que los países deberían recibirla como una bendición.”

La situación de los inmigrantes, principalmente la de los trabajadores limítrofes, exige el desarrollo de estrategias y normas que garanticen el respeto de sus derechos sociales, económicos y culturales. En atención a su condición de seres humanos, y en consonancia con la tradicional disposición de nuestra Nación de recibir fraternalmente y garantizar los derechos constitucionales vigentes a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

—A las comisiones de Población y Recursos Humanos, de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa Nacional, de Derechos Humanos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.